

10-51-B



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Departamento de Justicia
APARTADO 9020192, SAN JUAN, PR 00902-0192

Guillermo A. Somoza Colombani
Secretario de Justicia

Tel. (787) 723-4983
(787) 721-7771

10 de septiembre de 2010

CARTA CIRCULAR NÚM.: 2010-04

**AGENCIAS, INSTRUMENTALIDADES Y CORPORACIONES PÚBLICAS
DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO, CÁMARAS LEGISLATIVAS Y
MUNICIPIOS**

YMC

OPINIONES DEL SECRETARIO DE JUSTICIA

La presente carta circular tiene el propósito de orientar a todas las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, cámaras legislativas y municipios, en cuanto a los requisitos y criterios para solicitar opiniones legales al Secretario de Justicia a tenor con la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Justicia". Con la publicación de esta carta circular se establecen claramente los requisitos que deben cumplir los organismos gubernamentales que presenten consultas en virtud de la citada Ley Núm. 205, de modo que se puedan atender más ágil y eficientemente las decenas de solicitudes de opinión que mensualmente recibe el Departamento de Justicia.

**I. AUTORIDAD LEGAL DEL SECRETARIO DE JUSTICIA PARA
EMITIR OPINIONES Y LAS NORMAS APLICABLES A SU
EJERCICIO**

La autoridad legal del Secretario de Justicia para emitir opiniones legales emana del Artículo 6 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, conocida como "Ley

Orgánica del Departamento de Justicia”. Dicho artículo específicamente establece a favor de qué entidades el Secretario de Justicia emitirá su opinión. El mismo dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

El Secretario dará su opinión por escrito al Gobernador, a la Asamblea Legislativa o a cualquiera de sus Cámaras, al Contralor de Puerto Rico, a los jefes de agencias y de las corporaciones públicas, cuando medie una resolución de su Junta de Directores autorizando la solicitud, sobre cuestiones de derecho que se susciten en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, dará su opinión a los alcaldes de los municipios, en cuyo caso la solicitud debe ser tramitada a través de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. En el caso de las legislaturas municipales, se requerirá una resolución de la legislatura correspondiente autorizando a su presidente a solicitar la opinión.

JML El Secretario de Justicia sólo emitirá opiniones o dictámenes a la Asamblea Legislativa, o a una de sus Cámaras, cuando lo solicite el secretario del cuerpo que interesa la consulta a requerimiento del mismo mediante una resolución aprobada a tales efectos. El Secretario no emitirá dictámenes a las comisiones legislativas ni a sus miembros individualmente. Se exceptúan de esta norma los informes en cuanto a proyectos de ley que rinda el Secretario a las comisiones legislativas, en virtud de la autoridad que le confiere el Artículo 10 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004.

Es importante aclarar, además, que la autoridad legal del Secretario de Justicia para emitir opiniones bajo el Artículo 6 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004 es fundamentalmente diferente y separada de sus deberes como principal asesor legal del Ejecutivo, tanto bajo el Artículo 10 de dicha Ley, como bajo las Secciones 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico. El asesoramiento legal que le brinde el Secretario de Justicia a los distintos componentes de la Rama Ejecutiva (y, en algunos casos, a las demás ramas del gobierno, como representante legal del Estado Libre Asociado, véase Artículo 4 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004) fuera del trámite formal, según dispuesto en esta Carta Circular, para la emisión de opiniones bajo el antes citado Artículo 10, será de carácter confidencial y privilegiado.

Por otra parte, el Secretario de Justicia no tiene autoridad para actuar como asesor legal de personas particulares, por lo que no emitirá opinión o consulta alguna a solicitud de éstas. Tampoco ofrecerá información a personas particulares sobre las consultas que se encuentren ante su consideración.

El Secretario de Justicia podrá discrecionalmente ofrecer asesoramiento legal a agencias del Gobierno de Estados Unidos cuando la solicitud gire en torno a un asunto de derecho puertorriqueño que surja dentro del contexto de un acuerdo o colaboración de una agencia federal con una entidad del Gobierno de Puerto Rico y, a juicio del Secretario de Justicia, el interés público requiera insoslayablemente que éste provea su asesoramiento legal. Véase Op. Sec. Just. de 30 de junio de 2010. La solicitud de opinión en estos casos debe cumplir con los requisitos que se exponen en esta carta circular.

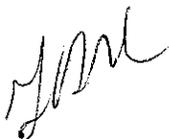
Las opiniones emitidas por el Secretario de Justicia deberán ser consistentes entre sí. A estos efectos, las opiniones emitidas en el pasado por el Secretario de Justicia serán autoridad legal que debe ser considerada como sumamente persuasiva al emitir nuevas opiniones. Así pues, se incorpora la doctrina del *stare decisis* al procedimiento para emitir opiniones. Sin embargo, se debe aclarar que las opiniones del Secretario de Justicia no son irrevocables. El Secretario podrá revocar sus propias opiniones mediante una determinación expresa y fundamentada si entiende que la decisión previa está errada, o que el estado de derecho o la totalidad de las circunstancias sociales ha cambiado.

II. REQUISITOS DE TODA SOLICITUD DE OPINIÓN O CONSULTA

Toda solicitud de opinión o consulta al Secretario de Justicia deberá cumplir con los requisitos que se esbozan a continuación:

1. La solicitud deberá estar suscrita por el Secretario o jefe de la entidad gubernamental, o en su defecto, por el Subsecretario o subjefe de ésta. La misma deberá estar dirigida al Secretario de Justicia, a la atención del Secretario Auxiliar de Asesoramiento. Con este requisito se busca garantizar que solamente se remitan a la atención del Secretario de Justicia controversias legales genuinas que no han podido ser resueltas a pesar de haber sido llevadas a la atención de los funcionarios del más alto nivel de la entidad gubernamental en cuestión.

2. La solicitud deberá contener una relación sucinta, pero completa, de todos los hechos pertinentes al asunto que da origen a la consulta.
3. Deberá acompañarse con la solicitud una certificación del solicitante haciendo constar que el asunto objeto de la consulta no se encuentra bajo la consideración de ningún tribunal de justicia o foro administrativo con jurisdicción primaria sobre el mismo. Si el asunto objeto de consulta se convirtiera en litigioso en algún momento mientras se encuentre ante la consideración del Secretario de Justicia, el solicitante deberá notificarle tal hecho inmediatamente. En estos casos, el Secretario de Justicia se abstendrá de opinar formalmente en torno al asunto, pero tendrá discreción para asesorar al solicitante si entiende que ello es necesario para que éste pueda desempeñar las funciones que le impone la ley. Véase Art. 6 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004.
4. Se hará constar la referencia legal en que se basa la consulta. Las entidades del gobierno que cuenten con los servicios de un abogado, deberán acompañar con la solicitud de consulta un breve memorando de derecho en el cual se exprese la posición del organismo solicitante en cuanto al punto de derecho objeto de la consulta. Véanse Ops. Sec. Just. Núm. 27 de 1970; Núm. 17 de 1977; y Núm. 20 de 1979.
5. Deberá acompañarse con la solicitud de opinión todos los documentos relacionados y pertinentes a la misma, así como toda información necesaria para llevar a cabo un análisis coherente y efectivo del asunto.
6. El Secretario de Justicia podrá discrecionalmente solicitar información o argumentación adicional, tanto de la parte solicitante como de otras partes involucradas o con algún interés en el asunto, a los fines de estar en condiciones de evaluar de forma completa el asunto ante sí.
7. De no enviarse el memorando requerido por el inciso 4 de esta sección, o cualquiera otra información que el Secretario de Justicia entienda esencial e imprescindible para poder evaluar completa y correctamente el asunto objeto de la solicitud de opinión, el Secretario



de Justicia no atenderá la misma. Cuando la solicitud esté incompleta, el Secretario de Justicia notificará al solicitante y le concederá un término razonable—que en ningún caso será mayor de veinte (20) días—para suplir la información requerida. De no recibirse la información solicitada dentro del término concedido, el Secretario de Justicia entenderá que la agencia desistió de su solicitud y procederá al archivo de la misma.

III. DISCRECIÓN DEL SECRETARIO DE JUSTICIA AL EMITIR OPINIONES

La Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004 no permite que el Secretario de Justicia emita opinión o dictamen alguno cuando se trate de consultas en torno a asuntos *sub judice* (casos sometidos ante la consideración de foros adjudicativos), o respecto a los cuales ya un foro haya dictado sentencia o resolución final y firme. No obstante lo anterior, y aun en estos casos, el Secretario de Justicia ostenta autoridad legal plena para determinar discrecionalmente si brinda asesoramiento legal al funcionario solicitante, dependiendo de las circunstancias particulares de cada instancia, cuando el Secretario lo estime necesario o conveniente a fin de viabilizar la continuidad en el ejercicio de las funciones y deberes impuestos por ley.

Por otra parte, en todas las demás situaciones en que una consulta sea debidamente presentada, el Secretario de Justicia tendrá amplia discreción para emitir una opinión al respecto, según autorizado en el Artículo 6 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004. Sin embargo, el Secretario no está obligado a emitir una opinión sobre un asunto cuando no lo crea necesario ni conveniente. En el ejercicio de esta discreción, el Secretario se guiará por los siguientes principios, entre otros:

1. Si la consulta conlleva emitir un pronunciamiento o hacer una determinación sobre la validez o la constitucionalidad de una ley o de una resolución conjunta. Véanse Ops. Sec. Just. Núm. 37 de 1957, Núm. 42 de 1963 y Núm. 6 de 1977. Se debe aclarar, sin embargo, que el Secretario de Justicia mantiene y ejercerá debidamente su deber ministerial de recomendar en torno a la constitucionalidad de las leyes y resoluciones conjuntas durante el trámite de las medidas en la Asamblea Legislativa y antes de que éstas sean firmadas por el (la)

Gobernador(a). Véase Art. 10 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2005.

2. Si la consulta puede llevar al Secretario de Justicia a arrogarse o atribuirse facultades que competen propiamente a otros funcionarios u organismos gubernamentales. Véanse Ops. Sec. Just. Núm. 6 de 1977; Núm. 3 de 1977; Núm. 4 de 1984; Núm. 18 de 1985; y Núm. 14 de 1993. Así pues, el Secretario de Justicia le brindará deferencia a la interpretación legal que haga una agencia de los estatutos que administra dicha agencia, siempre y cuando tal interpretación sea una razonable y que no resulte en una acción arbitraria o caprichosa de parte del organismo administrativo con jurisdicción primaria sobre el asunto.
3. Si la consulta trata sobre meras situaciones o controversias de hecho, o de índole puramente administrativa ajenas al ámbito de asesoramiento legal que compete al Secretario de Justicia. Véanse Ops. Sec. Just. Núm. 12 de 1973; y Núm. 13 de 1988. El Secretario de Justicia también tomará en cuenta si la consulta versa sobre normas o políticas administrativas que no constituyen propiamente asuntos de derecho. Véase Op. Sec. Just. Núm. 6 de 1985. El asesoramiento del Secretario se ciñe a materia puramente legal.
4. Si se trata de una consulta en torno a planteamientos técnicos o altamente especializados, ajenos al ámbito de asesoramiento legal que rinde el Secretario de Justicia. Véase, Op. Sec. Just. Núm. 7 de 1974.
5. Si se trata de una consulta basada en situaciones de hecho, premisas o controversias hipotéticas. Véanse Ops. Sec. Just. Núm. 21 de 1971; Núm. 9 de 1977; Núm. 24 de 1977; y Núm. 30 de 1984. Sin embargo, el Secretario de Justicia tendrá discreción para emitir su opinión cuando se le presente una consulta sobre algún asunto de alto interés público, y en la cual se delinee una cuestión de puro derecho con suficiente precisión.
6. Si se trata de actuaciones consumadas o previamente decididas por el funcionario consultante. En casos de esta naturaleza, se tomará en cuenta el hecho de que la actuación administrativa haya sido

JMM

cuestionada por otro funcionario con autoridad legal para ello. Véanse Ops. Sec. Just. Núm. 13 de 1971; Núm. 27 de 1973; y Núm. 31 de 1983.

7. Si se trata de controversias en las que se diriman meras diferencias de criterio, sin consecuencias legales de clase alguna, entre funcionarios administrativos. El Secretario de Justicia, como regla general, se abstendrá de actuar como árbitro en controversias entre funcionarios públicos, excepto cuando las diferencias entre éstos sean de tal naturaleza que afecten el funcionamiento, desarrollo o estabilidad de un proyecto o programa gubernamental. En algunas circunstancias, además, y en los casos donde la controversia trascienda el ámbito de la agencia propiamente, el Secretario de Justicia podrá intervenir en el ejercicio de la autoridad delegada en virtud del Artículo 8 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004.

- 
8. Si la solicitud de opinión se relaciona con asuntos que están sujetos a alguna fecha límite, ésta se deberá enviar por lo menos 45 días antes de dicha fecha. Además, la solicitud deberá expresar claramente que la misma está sujeta a una fecha límite, y hacer referencia a la disposición de ley o reglamentaria de la cual surge tal fecha.

IV. NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS OPINIONES

El Secretario de Justicia le notificará por correo su opinión sobre el asunto objeto de consulta tanto a la parte consultante como a cualquier otra parte que haya participado en el proceso de consulta al suministrar información o presentar su argumentación, haciendo constar en tal notificación el derecho a solicitar reconsideración de la opinión y el plazo para así hacerlo.

Por otra parte, el Secretario tendrá discreción para hacer accesibles al público en general aquellas opiniones que estén relacionadas con alguna cuestión de política pública de alto interés para la ciudadanía en general. Aquellas opiniones que no sean publicadas serán confidenciales, y cualquier persona que desee tener acceso a ellas deberá obtener la autorización por escrito de la agencia o entidad gubernamental a la que se le dirigió la opinión.

Aquellas opiniones que originalmente no se hayan publicado, pero que posteriormente sean citadas en alguna opinión publicada, se considerarán públicas y accesibles al público en general.

V. RECONSIDERACIÓN DE LAS OPINIONES

El Secretario de Justicia podrá reconsiderar sus opiniones, a solicitud del consultante o parte interesada por el dictamen emitido. Éstos deberán someter a la consideración del Secretario un escrito debidamente fundamentado en apoyo de la solicitud de reconsideración dentro del plazo de 20 días contados a partir de la notificación de la opinión a las partes que hayan participado en el proceso de consulta.

El Secretario de Justicia sólo reconsiderará una opinión cuando se demuestre que ha incurrido en error de derecho o cuando se demuestre que es clara y palpablemente errónea. Véanse Ops. Sec. Just. Núm. 20 de 1974; Núm. 14 de 1975; Núm. 33 de 1989; Núm. 8 de 1998; y Núm. 16 de 1998.

VI. DEROGACIÓN

Se deroga la Carta Circular Núm. 2005-02 de 8 de septiembre de 2005. Así también, se deroga cualquier otra carta circular, memorando, comunicación escrita o instrucción anterior en todo cuanto sea incompatible con lo dispuesto en la presente Carta Circular.

VII. VIGENCIA

Esta Carta Circular entrará en vigor en la fecha de su aprobación.


Guillermo A. Somoza Colombani



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Departamento de Justicia
APARTADO 9020192, SAN JUAN, PR 00902-0192

Guillermo A. Somoza Colombani
Secretario de Justicia, Interino

Tel. (787) 723-4983
(787) 721-7771

CARTA CIRCULAR NÚM.: 2010-03

SECRETARIOS, JEFES DE AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES PÚBLICAS

GUIAS PARA EL MANEJO Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES PÚBLICAS EN LOS CASOS BAJO LA LEY NÚM. 7 DE 9 MARZO DE 2009, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO "LEY ESPECIAL DECLARANDO ESTADO DE EMERGENCIA FISCAL Y ESTABLECIENDO PLAN INTEGRAL DE ESTABILIZACIÓN FISCAL PARA SALVAR EL CRÉDITO DE PUERTO RICO" ("LEY NÚM. 7"), ANTE LOS FOROS ADMINISTRATIVOS Y/O JUDICIALES.

I. BASE LEGAL

Esta Carta Circular se promulga de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Justicia" ("Ley Núm. 205"), el cual dispone que el Secretario de Justicia es el Jefe del Departamento de Justicia y como tal, el principal funcionario de ley y orden del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, encargado de promover el cumplimiento y ejecución de la ley, conforme disponen las Secciones 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 3 L.P.R.A. § 292. Además, de conformidad con el estado de derecho vigente, la representación oficial de los departamentos ejecutivos y las agencias gubernamentales, así como de sus funcionarios y empleados ante los tribunales de justicia, está encomendada al Secretario de Justicia. Véanse Art. 4 de la Ley Núm. 205, 3 L.P.R.A. § 292a, y la Carta Circular Núm. 2010-01, Departamento de Justicia (26 de enero de 2010).

No obstante, añade el citado Artículo 4 de la Ley Núm. 205 que "el Secretario podrá otorgar dispensas a las agencias y departamentos ejecutivos para que se

representen individualmente en los foros judiciales y administrativos por causa justificada y en los casos apropiados". Id.; Véase también Reglamento sobre representación legal y pago de sentencia, Reglamento Núm. 7622, Departamento de Justicia (3 de diciembre de 2008). Por otro lado, sabido es que las dispensas se conceden para casos específicos y se circunscriben únicamente a la representación ante el foro con jurisdicción. Véase Art. 60(b) de la Ley Núm. 205, 3 L.P.R.A. § 294(l). La solicitud de una dispensa para representación legal individualizada requiere que la agencia justifique las circunstancias que hacen meritoria la concesión de la dispensa e identifique los recursos legales que se quieren contratar. Además, debe establecer el compromiso de la agencia de asumir los gastos de representación legal. Véase Carta Circular Núm. 2010-01.

Asimismo, la presente Carta Circular se adopta de conformidad con los Artículos 8 y 18(j) y (n) de la Ley Núm. 205, 3 L.P.R.A. §§ 292e y 292o, los cuales facultan al Secretario de Justicia para establecer, mediante reglamento, las guías necesarias para determinar los asuntos que comprendan consideraciones de política pública desde el punto de vista legal.

II. PROPÓSITO

En los pasados meses, este Departamento ha asumido la representación legal de varias agencias e instrumentalidades públicas en casos bajo la Ley Núm. 7. Así también, el Departamento ha otorgado dispensas de representación legal a varias agencias para que éstas asuman su representación legal en casos bajo la Ley Núm. 7, bien con sus propios abogados o mediante la contratación de abogados externos. **Sin embargo, en vista de la importancia de la política pública envuelta en estos casos, resulta necesario que el Departamento de Justicia supervise, dirige y coordine la defensa de los mismos para garantizar un manejo uniforme.**

III. DEFINICIONES

Para efectos de esta Carta Circular, los siguientes términos significarán:

- A. "Ley Núm. 7" significa la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada, conocida como "Ley Especial Declarando

Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico".

- B. "Entidad Pública" significará toda agencia, instrumentalidad, o departamento ejecutivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que caiga bajo las disposiciones de la Ley Núm. 7, que no esté expresamente autorizada por ley a representarse a sí misma, y cuya representación legal recae en el Departamento de Justicia.
- C. "Departamento" significa el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

IV. DISPOSICIONES

- (1) El Departamento asignará un grupo de abogados que tendrá la responsabilidad de supervisar la defensa de todos los casos bajo la Ley Núm. 7, incluyendo tanto aquellos casos que son manejados por los abogados del Departamento, como los casos para los cuales el Departamento haya otorgado dispensas a las entidades públicas para asumir su propia representación legal, **sea a través de sus propios abogados o de abogados externos.**
- (2) Los abogados asignados por el Departamento supervisarán, dirigirán y coordinarán con los abogados de las entidades públicas, incluyendo sus abogados externos, la defensa de todos los casos bajo la Ley Núm. 7 ante foros administrativos y judiciales.
- (3) Toda entidad pública que haya asumido su propia representación legal en casos de reclamaciones bajo la Ley Núm. 7 ante cualquier foro administrativo o judicial, **a través de sus propios abogados o abogados externos**, en virtud de una dispensa otorgada por el Departamento, deberá coordinar la defensa de dichos casos con los abogados del Departamento que serán asignados, según mencionado en los párrafos anteriores.
- (4) Toda entidad pública que haya asumido su propia representación legal en casos bajo la Ley Núm. 7 deberá enviar un listado de todos los casos que tiene pendientes, así como copia de los expedientes de éstos

plm

a la Secretaría Auxiliar de Litigios, o a la Oficina de la Procuradora General, según sea el caso, en o antes del 12 de marzo de 2010.

- (5) Junto con la copia de los expedientes, la entidad pública y/o el abogado externo, cuando aplique, deberá incluir un informe de situación para cada caso que detalle la etapa del caso, las órdenes pendientes de cumplimiento, la teoría de la parte querellante o apelante, y la teoría del caso asumida por la entidad pública, detallando los hechos, el derecho y la evidencia que sustentan dicha teoría.
- (6) Para facilitar la gestión de supervisar y coordinar la defensa de los casos bajo la Ley Núm. 7, los abogados de la entidad pública – sean estos sus propios abogados o abogados externos – deberán enviar a la Secretaría Auxiliar de Litigios o a la Oficina de la Procuradora General, según sea el caso, copia de todo escrito que vayan a presentar ante el foro correspondiente (o a la otra parte, en el caso de documentos de descubrimiento de prueba, tales como requerimientos de producción de documentos, interrogatorios y/o contestaciones a los mismos) **previo a la presentación o notificación del mismo.** También deberán enviar oportunamente copia de los escritos presentados por las otras partes en el caso y las decisiones que se emitan.
- JM* (7) **Ninguna entidad pública ni sus representantes legales tienen autoridad para transigir reclamaciones en casos bajo la Ley Núm. 7, ante cualquier foro administrativo o judicial, sin mediar la anuencia previa, por escrito, del Departamento.**
- (8) El Departamento se reserva el derecho de unirse a la representación legal de la entidad pública de así entenderlo prudente.
- (9) **Estas Guías son de cumplimiento estricto y su incumplimiento podrá conllevar la revocación de la dispensa concedida.**

- (10) El Departamento convocará oportunamente una reunión de todos los abogados de las entidades públicas que tienen a su cargo la defensa de los casos bajo la Ley Núm. 7 para discutir estas Guías.

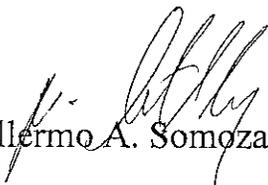
IV. DEROGACIÓN

Se deroga cualquier otra carta circular, memorando, comunicación escrita o instrucción anterior en todo cuanto sea incompatible con lo dispuesto en la presente Carta Circular.

V. VIGENCIA

La presente Carta Circular tendrá vigencia inmediata.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 5 de marzo de 2010.


Guillermo A. Somoza Colombani



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Departamento de Justicia
APARTADO 9020192, SAN JUAN, PR 00902-0192

Guillermo A. Somoza Colombani
Secretario de Justicia, Interino

Tel. (787) 723-4983
(787) 721-7771

CARTA CIRCULAR NÚM. 2010-02

SECRETARIOS, JEFES DE AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES PÚBLICAS, DIRECTORES EJECUTIVOS, PRESIDENTES DE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

DEROGACIÓN DE CARTA CIRCULAR 2009-05

I. BASE LEGAL

Esta Carta Circular se promulga de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Justicia” (“Ley Núm. 205”), el cual dispone que el Secretario de Justicia es el Jefe del Departamento de Justicia y como tal, el principal funcionario de ley y orden del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, encargado de promover el cumplimiento y ejecución de la ley, conforme disponen las Secciones 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 3 L.P.R.A. § 292. Asimismo, la presente Carta Circular se adopta a tenor de los Artículos 8 y 18 (l), (n) y (u) de la Ley Núm. 205, 3 L.P.R.A. §§ 292e y 292o, los cuales facultan al Secretario de Justicia para establecer las guías necesarias para determinar los asuntos que comprendan consideraciones de política pública desde el punto de vista legal; a recomendar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa la legislación que estime necesaria para lograr la mejor administración de la justicia; a actuar como miembro de las juntas, comités y organismos en que sea designado por ley o por el Gobernador y ejercer los deberes que se le asignen; y realizar todos aquellos otros actos convenientes y necesarios para dar cumplimiento a los propósitos de la Ley Núm. 205 y de las demás responsabilidades impuestas por ley.

II. DEROGACIÓN

En virtud de los poderes que me confiere la citada Ley Núm. 205, mediante esta Carta Circular se deroga la Carta Circular Núm. 2009-05.

III. VIGENCIA

La presente Carta Circular tendrá vigencia inmediata.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 11 de febrero de 2010.



Guillermo A. Somoza Colombani



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Departamento de Justicia
APARTADO 9020192, SAN JUAN, PR 00902-0192

Guillermo A. Somoza Colombani
Secretario de Justicia, Interino

Tel. (787) 723-4983
(787) 721-7771

CARTA CIRCULAR NÚM. 2010-01

SECRETARIOS, JEFES DE AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES
PÚBLICAS

**REQUISITOS ADICIONALES APLICABLES A SOLICITUDES DE
DISPENSA PARA LA CONTRATACIÓN DE REPRESENTACIÓN LEGAL**

I. BASE LEGAL

JMC
Esta Carta Circular se promulga de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Justicia" ("Ley Núm. 205"), el cual dispone que el Secretario de Justicia es el Jefe del Departamento de Justicia y como tal, el principal funcionario de ley y orden del Gobierno de Puerto Rico, encargado de promover el cumplimiento y ejecución de la ley, conforme disponen las Secciones 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 3 L.P.R.A. § 292. Asimismo, la presente Carta Circular se adopta a tenor del Artículo 8 de la Ley Núm. 205, 3 L.P.R.A. § 292e, el cual faculta al Secretario de Justicia a establecer las guías necesarias para determinar los asuntos que comprendan consideraciones de política pública desde el punto de vista legal.

Además, de conformidad con el estado de derecho vigente, la representación oficial de los departamentos ejecutivos y las agencias gubernamentales, así como de sus funcionarios y empleados ante los tribunales de justicia, está encomendada al Secretario de Justicia. Véanse Art. 4 de la Ley Núm. 205, 3 L.P.R.A. § 292a, y la Carta Circular Núm. 2005-01, Departamento de Justicia (25 de mayo de 2005). No obstante, añade el citado Artículo 4 de la Ley Núm. 205 que "el Secretario podrá otorgar dispensas a las agencias y departamentos ejecutivos para que se

representen individualmente en los foros judiciales y administrativos por causa justificada y en los casos apropiados”. Id.; Véase también Reglamento sobre representación legal y pago de sentencia, Reglamento Núm. 7622, Departamento de Justicia (3 de diciembre de 2008). Por otro lado, sabido es que las dispensas se conceden para casos específicos y se circunscriben únicamente a la representación ante el foro con jurisdicción. Cuando la determinación final del caso judicial o administrativo deba ser apelada o revisada, la agencia tiene que solicitar nueva dispensa antes de que sus representantes legales comiencen dicho trámite. De igual modo, la concesión de una dispensa para acudir al Tribunal de Apelaciones no autoriza a presentar ningún recurso posterior ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Para ello, debe solicitarse dispensa por separado. Véase Art. 60(b) de la Ley Núm. 205, 3 L.P.R.A. § 2947.

JML
La solicitud de una dispensa para representación legal individualizada requiere que la agencia justifique las circunstancias que hacen meritoria la concesión de la dispensa e identifique los recursos legales que se quieren contratar. Además, debe establecer el compromiso de la agencia de asumir los gastos de representación legal. Véase Carta Circular Núm. 2005-01.

Ahora bien, la Orden Ejecutiva Núm. 1 de 2009, Boletín Administrativo Núm. OE-2009-001 (“OE-2009-01”), aprobada por el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuño Buset, estableció que la situación fiscal de Puerto Rico es crítica, revelándose un déficit presupuestario extraordinario. Asimismo, mediante la Orden Ejecutiva Núm. 34 de 2009, Boletín Administrativo Núm. OE-2009-034 (“OE-2009-34”), el señor Gobernador, implantó medidas adicionales de control y reducción de gastos relacionados a contratos de servicios, los cuales incluyen los contratos de servicios legales por agencias gubernamentales. Particularmente, mediante la OE-2009-34, se estableció que la “contratación de servicios es un recurso extraordinario que debe ser utilizado únicamente cuando redunde en un beneficio para la misión de la agencia”. Véase Por Cuanto Quinto de la OE-2009-34. De igual forma, la OE-2009-34 dispuso que la Junta de Estabilización y Reconstrucción Fiscal y la Oficina del Secretario de la Gobernación **revisarán y aprobarán** todos los contratos de servicios que interesen otorgar o enmendar las agencias, instrumentalidades, oficinas o dependencias de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico.¹

¹ El proceso de revisión y aprobación de contratos por la Junta de Estabilización y Reconstrucción Fiscal y la Oficina del Secretario de la Gobernación, es separado del proceso de solicitud de dispensa ante el Departamento de Justicia.

II. PROPÓSITO

El Departamento de Justicia tiene el deber indelegable de velar por la consistencia y uniformidad de la política pública que se establece mediante la litigación de todos los casos que involucran los intereses del Estado. De igual manera, este Departamento vela por el bienestar económico del Gobierno de Puerto Rico, de modo tal que se reduzcan los gastos por representación legal.

me Así pues, esta Carta Circular tiene el propósito de actualizar los requisitos que debe contener toda solicitud de dispensa para la contratación de bufetes externos. Este trámite servirá para asegurar que cada dispensa otorgada por el Departamento de Justicia sea estrictamente necesaria para lograr la mejor, más eficiente y costo-efectiva representación legal de la agencia que la solicita.

III. NORMAS

Como parte del trámite para la concesión de cualquier dispensa para representación legal fuera del Departamento de Justicia, será requisito indispensable que cada Secretario o Jefe de agencia, instrumentalidad, oficina o dependencia de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, someta una solicitud debidamente fundamentada a fin de tramitar diligentemente la dispensa.

El Departamento de Justicia solamente tramitará las solicitudes de dispensa que contengan la siguiente información:

- (A) el **nombre** de la agencia ejecutiva solicitante;
 - (B) el **foro judicial** ante el cual se ventila o ventilará la controversia en cuestión;
 - (C) una **relación sucinta**, pero completa, de todos los hechos pertinentes al asunto que da origen a la solicitud y las disposiciones legales pertinentes;
-

- Jme*
- (D) la **justificación** para que no sea el Departamento de Justicia quien asuma la representación legal de la agencia;
 - (E) el **nombre y la dirección de los abogados** a los cuales la agencia ejecutiva propone designar como sus representantes legales, incluyendo las razones por las cuales interesa contratar esos representantes legales en particular;
 - (F) Debe incluir **copia del contrato**, así como un **desglose y justificación** de la tarifa y la cuantía total a pagarse por la representación legal. Dicha justificación deberá establecer la razonabilidad y la competitividad en el mercado de la tarifa ofrecida, el nivel de calidad del recurso legal a contratarse, y la necesidad de que sea un abogado fuera del Departamento de Justicia el que brinde el servicio. El Departamento de Justicia evaluará la razonabilidad de la tarifa ofrecida a base de los siguientes parámetros:
 - (i) \$125.00 la hora por los servicios de los abogados que tengan 10 años o más de experiencia;
 - (ii) \$100.00 la hora por abogados que tengan entre 5 a 9 años de experiencia;
 - (iii) \$75.00 la hora por abogados que tengan menos de 5 años de experiencia;
 - (iv) \$35.00 la hora por Oficiales Jurídicos.
 - (G) las fechas de los **señalamientos** pendientes ante el foro judicial;
 - (H) la **posición** de la agencia ejecutiva en cuanto a las alegaciones importantes objeto del pleito;
 - (I) una certificación de que se trabajarán los pleitos con **celeridad**, presentando mociones de desestimación y solicitudes de sentencias sumarias;

- (J) compromiso de presentar un **estado procesal** de los casos al Departamento de Justicia cada seis (6) meses, o en cualquier momento al ser requerido por el Departamento de Justicia;
- (K) especificar que la petición de dispensa **no afectará** el presupuesto de la agencia solicitante ni el erario.

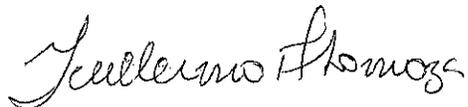
IV. DEROGACIÓN

Esta Carta Circular deroga cualquier otra carta circular, orden administrativa, memorando, comunicación escrita o instrucción anterior en todo cuanto sea incompatible con lo dispuesto en la presente Carta Circular.

V. VIGENCIA

La presente Carta Circular tendrá vigencia inmediata.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 26 de enero de 2010.



Guillermo A. Somoza Colombani